

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Trimestre . . . 2'75 —
Semestre . . . 5'00 —
Año . . . 9'50 —

FRANQUEO
CONCERTADO

Año II — Número 16 :: Redacción — Administración, Avenida de los Infantes de Lara, — Salas de los Infantes, viernes 13 de Marzo de 1931

La Opinión de Castilla

ORGANO SEMANAL DE LA ASAMBLEA DE AYUNTAMIENTOS DE BURGOS
DEFENSOR DE LA CAMPAÑA CONTRA EL 20 POR 100 DE PROPIOS

El Gobierno desestima las peticiones que la Asamblea de Ayuntamientos de Burgos acordó el día 2 de Noviembre de 1930

Una Real orden comunicada y remitida a nuestro ilustre presidente y alcalde de Burgos, D. Eloy García de Quevedo, ha puesto término a las peticiones que la Asamblea de Burgos elevó al Gobierno en súplica de que se suprimiera el 20 % de propios, el 10 % de forestales, el 10 % de pesas y medidas y la reversión a los Ayuntamientos del impuesto de las cédulas personales. A todos estos puntos contesta la expresada Real orden, y como esta es de gran transcendencia y de extraordinario interés, la publicamos íntegramente, publicando también la carta que envía a todos los alcaldes adheridos a la Asamblea el Sr. García de Quevedo.

Después de publicar los dos importantes documentos, la dirección de este semanario comentará la real orden con la sinceridad y valentía que tiene ya demostrada en el trascurso de la presente campaña. Sería cobardía imperdonable que a la hora de decir al Gobierno la verdad nos escudáramos con la previa censura.

Ministerio de Hacienda.—Subsecretaría.—Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la Real orden siguiente:

«Vistos los escritos elevados a la Presidencia del Consejo de Ministros, en virtud de acuerdos adoptados en las Asambleas de Municipios; celebradas en Palencia y Burgos, en 31 de Octubre y 2 de Noviembre de 1930, respectivamente, en cuyos escritos se solicita de conformidad con las conclusiones adoptadas por dichas Asambleas, que sean derogadas las disposiciones que regulan la exacción del importe del 20 por 100 de propios, la reducción o desaparición del 20 por 100 de los remates, la desaparición del 10 por 100 de aprovechamientos forestales y la del 10 por 100 de pesas y medidas, la entrega a los Ayuntamientos de la percepción del impuesto de cédulas personales y que se dicte urgentemente, una disposición por la cual se suspenda el apremio por el 20 por 100 de propios, cesando todo procedimiento incoado y no instándose ninguno nuevo.—RESULTANDO.—que al expediente que en virtud de estos escritos se ha instruido en este Ministerio se han incorporado otras instancias de 2 y 29 de Enero próximo pasado, suscritas por D. José María de Hoyos y Vincent, Marqués de Hoyos, y D. Mariano García Cortés, Presidente y Secretario respectivamente, de la Unión de Municipios Españoles por contener peticiones

análogas a las contenidas en los escritos antes mencionados.—RESULTANDO—que la ley de 12 de Junio de 1911, que ordenó la supresión del impuesto de consumos en toda España y determinó los plazos en que debía llevarse a cabo totalmente, en las capitales de provincia, poblaciones asimiladas y pueblos, partiendo de este supuesto, dispuso en su artículo 4.º que desde el día 1.º de Enero de 1914 dejarían de exigirse a los Ayuntamientos el 20 por 100 de la renta de propios, el 10 por 100 de arbitrios de pesas y medidas y el 10 por 100 de aprovechamientos forestales en los montes a cargo del Ministerio de Hacienda.—RESULTANDO que el propio poder legislativo al llegar el año 1914 y ante la no aplicación rigurosa de la Ley (ya que había Ayuntamientos a quienes, habiendo correspondido suprimir el impuesto de consumos, continuaban autorizados para su exacción) se dispuso en el art. 8.º de la Ley de Presupuestos de 26 de Diciembre de 1914 al autorizar la continuación del cobro del referido impuesto, que se restablecía en todos los Municipios de España, la obligación de que les eximió el artículo 4.º de la ley 1911.—RESULTANDO que se sucedieron las prórrogas del impuesto de Consumos y lógicamente las Leyes de Presupuestos de 23 de Diciembre de 1916 y 29 de Abril de 1920 reprodujeron el texto del art. 8.º de la 26 de Diciembre de 1914.—RESULTANDO que en esta situación se llegó a la publicación del Estatuto Municipal de 8 de Marzo de 1924, y en él (disposición transitoria 18.ª) se concedió un último plazo, que debía terminar en 30 de Junio de 1925, para que la total supresión del impuesto de consumos tuviera efectividad y consecuentemente se dijo que en la misma fecha cesaría la suspensión del cumplimiento del art. 4.º de la Ley de 12 de Junio de 1911.—CONSIDERANDO que si tan claramente aparece demostrado el espíritu de la legislación en la materia, es claro que decretadas con posterioridad al Estatuto Municipal, nuevas prórrogas del impuesto de Consumos los Ayuntamientos venían obligados a continuar satisfaciendo al Estado los tantos por ciento a que se refiere el art. 4.º de la Ley de 12 de Junio de 1911.—CONSIDERANDO que los recursos que el libro segundo del Estatuto Municipal concedía a los Ayuntamientos eran más que suficientes para atender a sus obligaciones, es-

timó convenientes no restar al Estado ingresos, sin duda, por ello, el Decreto-Ley de presupuestos de 29 de Junio de 1926, modificando por las razones indicadas, el espíritu de la Ley de 12 de Junio de 1911 dispuso dejar sin efecto el art. 4.º de ésta y el precepto concordante del apartado A de la 18.ª disposición transitoria.—CONSIDERANDO que el relevar de aquellas disposiciones a los Municipios afectaría al Tesoro en una cifra que se aproximaría a los 10.000.000 de pesetas.—CONSIDERANDO por lo que respecta al impuesto de cédulas personales y su entrega a los Ayuntamientos de la percepción del mismo que fué siempre un recurso del Estado hasta que parcialmente pasó a ser recurso solamente de los Ayuntamientos capitales de provincia poblaciones de más de 30.000 habitantes y Puertos de Cartagena, Gijón y Vigo, cesión que hizo el Estado a estos Ayuntamientos en virtud de la Ley de 3 de Agosto de 1907 que dispuso la supresión desde 1.º de Enero de 1908 del impuesto de Consumos sobre la especie de vinos.—CONSIDERANDO que reconociendo el Gobierno que para los grandes deberes que el Estado imponía a las Diputaciones provinciales eran insuficientes a estas Corporaciones los ingresos a que ascendían las aportaciones municipales y sus otras fuentes ordinarias de ingreso dispuso por el art. 226 del Estatuto provincial de 20 de Marzo de 1925 que la percepción del impuesto de cédulas personales pasaría desde 1.º de Enero de 1926 a ser un recurso de las Diputaciones provinciales, aunque figurando unas cuotas para los Ayuntamientos de un tanto por ciento en relación con la recaudación que obtuvieran en el año 1925 cuyo pormenores se de talla en la instrucción de Cédulas de 4 de Noviembre de 1925.—CONSIDERANDO por lo que respecta a la petición de que se suspenda el apremio por el 20 por 100 de propios, cesando todo procedimiento incoado y no instándose ninguno nuevo que el art. 7.º de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.º de Julio de 1911, previene de un modo terminante, que en ningún caso se suspenderán los procedimientos de apremio por virtud de recursos interpuestos por los interesados si no se realiza el pago del débito o la consignación de su importe y este mismo precepto está recogido en el art. 256 del vigente Estatuto de Recaudación, que exige,

además, que se constituya en la Caja general de Depósito o en sus Sucursales de las provincias, a disposición del Delegado de Hacienda, el 25 por 100 del importe del débito para garantizar el de los recargos o dietas, costas y gastos que se originen en el expediente ejecutivo.—CONSIDERANDO por tanto que no hay términos hábiles dentro de lo legalmente establecido, para acceder a la petición de que se trata, puesto que no pueden suspenderse los procedimientos de apremios incoados, contra los Ayuntamientos por no haber ingresado a su debido tiempo el importe del 20 por 100 de propios mientras cada uno de ellos no cumpla los requisitos que exigen las disposiciones citadas o se declaren improcedentes por acuerdo firme de los débitos perseguidos. Su Majestad el Rey (que Dios guarde) conformándose con lo informado con las Direcciones generales de Propiedades y Contribución territorial, Rentas públicas y Tesoro público, se ha dignado resolver: 1.º—Que no puede accederse a lo solicitado en las conclusiones de la Asamblea de Municipios de Burgos y Palencia referentes a la modificación o supresión de la exacción del 20 por 100 de propios, del 10 por 100 de aprovechamientos forestales y del 10 por 100 de pesas y medidas ya que por tratarse de ingresos del Tesoro público, su supresión y modificación ha de ser objeto de una ley votada en Cortes, sin que pueda este Ministerio hacer pronunciamiento especial en lo referente a la petición relativa al impuesto de cédulas, por tratarse de un recurso cedido por el Estado a las Diputaciones provinciales y dependiente, por tanto, del Ministerio de la Gobernación.—2.º—Que no procede dictar la disposición que se pretende que se dicte por la cual se suspenda el apremio por el 20 por 100 de propios, cesando todo procedimiento incoado y no instándose ninguno nuevo. De R. O. lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos». Lo que traslado a V. I. a iguales fines.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid 6 de Febrero 1931.—El Oficial Mayor.—Firma ilegible.

Sr. Alcalde de Burgos.—Presidente de la Asamblea de Municipios Españoles.

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Salas de los Infantes.

Distinguido compañero: En el pasado mes de Noviembre y a instancia de los Ayuntamientos que antes habían celebrado una gran reunión en

Salas de los Infantes, se convocó en esta Ciudad de Burgos una Asamblea que, tuvo el singular honor de presidir, y que por la calidad y cantidad de las representaciones que a ella acudieron y por el número de las adhesiones recibidas revistió importancia singular.

Tratóse principalmente en aquella Asamblea de pedir al Gobierno que suspendiera las disposiciones, a nuestro entender injustas, por las cuales se gravaba a los Ayuntamientos con el veinte por ciento sobre los bienes de propios, exacción que para muchos significa la ruina total, mucho más si, según se venía haciendo, se les exigen los atrasos de varios años.

Aprovechóse la ocasión para hacer algunas otras reclamaciones de orden económico no menos razonables, acordadas por unanimidad y con todo entusiasmo.

Y como resultado de las deliberaciones, el que suscribe, obrando en representación de la Asamblea, dirigió a la Presidencia del Consejo de Ministros una exposición razonada.

Han pasado más de tres meses y se ha publicado incluso un nuevo presupuesto por decreto, y ahora, con fecha 6 del actual, recibo el 21, la contestación a las peticiones hechas, la cual es, en bloque, contraria a nuestros deseos y la más dura que jamás pudimos esperar.

Creo un deber por mi parte comunicársela a los Sres. Alcaldes y le acompaño copia de ella.

Se había pensado continuar la campaña celebrando en Madrid una magna Asamblea.

No sé si las circunstancias políticas actuales y la, al parecer, inmediata renovación de Ayuntamientos, permitirán llevar el proyecto a la práctica pronto.

Espero acerca de este punto oír las opiniones de los Ayuntamientos iniciadores de la campaña, y con mucho gusto recibiré la de usted.

No debemos olvidar que el Ministro que ha dictado esa Real orden tan dañosa no desempeña ya la cartera.

Podemos abrigar la esperanza de que el nuevo tenga otro criterio más amplio y más justo. No debemos olvidar tampoco, que en la propia Real orden se contesta, no sólo a las peticiones de las Asambleas de Palencia y Burgos, sino a una instancia que suscribió, en igual sentido que la nuestra y llevando la voz de la Unión de Municipios Españoles, D. José María de Hoyos y Vinet, Marqués de Hoyos.

Y todos sabemos que el Excmo. Sr. Marqués de Hoyos es hoy Ministro de la Gobernación.

No parece que ha de faltar quien nos defienda dentro del Consejo de Ministros.

Nuestra causa es justa, el entusiasmo hasta ahora grande; pienso que esta contrariedad servirá a todos de cicate para seguir luchando y que los Ayuntamientos acabaremos por triunfar.

Para ello, en cuanto pueda, está dispuesto a seguir trabajando con la decisión mayor hasta donde sus mo-

destas fuerzas alcancen, el que con este motivo poco grato, se reitera de V. atto. s. y compañero

q. l. b. l. m.

Eloy García de Quevedo.

Las haciendas locales

Una de las preocupaciones más constantes del Poder legislativo ha sido la de fomentar las haciendas locales, preocupación que se ha mantenido en todos los estatutos promulgados para reglamentar la administración municipal. El propósito quedaba fácilmente explicado en el deseo de que los Ayuntamientos dispusieran de abundantes recursos para atender a los servicios sanitarios, de urbanización, cultura y otros que el Estado dejaba al cuidado de las corporaciones comunales. La supresión de los Consumos en 1911 privó a los Municipios de su más abundante fuente de ingresos, y como legítima compensación, para que los presupuestos locales no quedaran totalmente exhaustos, se decretó la derogación de los llamados 20 por 100 sobre los bienes de propios, 10 por 100 sobre aprovechamientos forestales y 10 por 100 de pesas y medidas.

No obstante, por causas que no son del caso citar, estos preceptos de la ley no fueron cumplimentados hasta la promulgación del Estatuto municipal: pero en 1927 la Dictadura, rectificando su propia obra, restableció los tres impuestos mencionados. Con ello se ocasionó un grave daño a las haciendas locales, y muy particularmente a los Municipios de escasos presupuestos. Los Ayuntamientos de las provincias de Burgos, Cuenca, Avila, Segovia, Madrid, y los de Aragón, Levante, y Extremadura, han promovido en estos últimos meses asambleas y otros actos encaminados a recabar de los Poderes públicos la derogación de aquellas disposiciones de la Dictadura que restablecieron los impuestos sobre bienes de propios, aprovechamientos forestales y pesas y medidas. Todos esos actos han resultado hasta el actual momento completamente estériles.

Llegada la hora de formalizar los presupuestos, la mayor parte de los Municipios de España se ven otra vez incapacitados para dotar los servicios más indispensables. Sin recurrir a los préstamos, más o menos usurarios, no pueden quedar atendidas necesidades que, como las sanitarias y el pago de los empleados, constituyen una obligación sagrada. Las haciendas locales se ven cada día más comprometidas, y los proyectos de abastecimiento de agua, de repoblación forestal, de mejoras urbanas y otros han de quedar arrumbados en espera de una legislación menos implacable y de otros Poderes más comprensivos.

Desde hace cuatro años los Ayuntamientos rurales formalizan sus presupuestos con grandes dificultades. Para conseguir su nivelación se dejan totalmente descuidados servicios que son un peligro para la salud pública y otros que pudieran constituir en

lo futuro una saneada y abundante fuente de ingresos. Los propios Municipios son los primeros en confesar estas deficiencias.

Si se pretende que las corporaciones comunales tengan bien atendidos los servicios que el Estado les confía y si verdaderamente se quiere que las haciendas locales sean algo más de una caja vacía, será necesario que el Poder público recoja y de satisfacción a estas peticiones que los Ayuntamientos vienen formulando desde hace bastante tiempo.

De «El Sol»

Unos comentarios sinceros

La censura no debe impedir que hagamos unos comentarios sinceros a la Real orden que se publica en este número. La defensa es legítima y sagrada, y más cuando se trata de un problema de alta política que tiene su raigambre en la conciencia del pueblo, en sus necesidades, en su derecho a la vida.

El político español se caracteriza y se ha caracterizado siempre por un desconocimiento absoluto de los problemas y de las necesidades del país. El mecanismo de la administración española, todo expediente y dificultades, es un reflejo de la ignorancia del político. Este cree, y hasta ahora le ha resultado bien, que al pueblo se le demuestra la suficiencia con unos discursos muy bien estudiados. Una serie de discursos en esas condiciones dan en España categoría para ser ministrable y hasta para llegar a la presidencia del Gobierno.

Y cuando los pueblos llegan con una causa justa a las alturas del Poder, el ministro dice siempre que se estudiará la petición con cariño, que se resolverá en justicia. Este es el caso del 20 por 100 de propios cuando iniciamos la campaña el pasado verano. El ministro de Hacienda nos dió muy buenas palabras, pero demostró desconocer por completo el problema jurídicamente. Y no es esto lo peor. Es todavía más censurable que un ministro desconozca la realidad de la vida de los municipios, sus imperiosas y cada vez mayores necesidades por arbitrio y voluntad de un Estatuto Municipal absurdo como los hombres que lo hicieron en la parte que quisieron retocar del proyecto de Maura y del de Canalejas.

Pero prescindiendo de todas esas gravosas obligaciones impuestas por leyes de la dictadura, cifrándonos sólo y exclusivamente a la forma como razona su negativa el Gobierno para no ceder a nuestra demanda, es verdaderamente infantil la alegación que hace para desesti-

mar la petición de miles de Ayuntamientos.

Sabemos que la ley de 12 Junio de 1911, que ordenó la supresión del impuesto de consumos en toda España y determinó los plazos en que debía de llevarse a efecto, dispuso también que desde el día 1.º de Enero de 1914 dejarían de exigirse a los Ayuntamientos el 20 por 100 de la renta de propios, el 10 por 100 de arbitrios de pesas y medidas y el 10 por 100 de aprovechamientos forestales en los montes a cargo del Ministerio de Hacienda. Y sabemos también que fundándose los Gobiernos en que no se habían suprimido totalmente los consumos por la prórroga que se concedió, las Cortes votaron en el artículo 8.º de la Ley de Presupuestos de 1914 la continuación del cobro de los impuestos de que se tratan.

Todo esto fué lo que se dijo a la Diputación de Soria en el mes de Junio del año anterior; todo esto lo saben ya de memoria los municipios más afectados. Y sabemos otra cosa que el Gobierno oculta maliciosamente en su Real orden. Ese 20 por 100 de propios y diez por ciento de forestales afecta hoy a toda clase de montes, sin distinción de los exceptuados o no de venta, de los que dependen del Ministerio de Hacienda o del de Fomento. Y si los pueblos no se defienden y toman parte activa en esta campaña, seguramente que dentro de pocos años veremos gravados con el 20 por 100 toda clase de ingresos y rentas de los Municipios. Como arriba se necesita dinero para sostener muchas cosas que no son precisas, hay que sacárselo a los de abajo por todos los procedimientos.

La supresión del impuesto de Consumos es una realidad hace muchos años. No existe hoy un diez por ciento de Ayuntamientos que sigan cobrando tal impuesto. Y ese diez por ciento no afecta a los Ayuntamientos pinariegos ni en la quinta parte. Luego esas autorizaciones que se han ido concediendo a los Gobiernos desde el año 1914 no responden a la verdad. El 20 por 100 de propios y el 10 por 100 de forestales se han seguido cobrando partiendo de una ficción legal.

Pero hay además otra ficción en lo que se refiere al impuesto de consumos en los pueblos de pinares. En estos pueblos no se cobra tal gravamen. Y estos son los pueblos que necesitan precisamente que se les suprima el lastre de tan gravosos impuestos. Los tres mil

pueblos de pinares, casi en su totalidad, no necesitan para cumplir sus obligaciones con la Hacienda y la Diputación hacer ninguna clase de repartos, porque las obligaciones municipales salen todas del producto del monte.

Confiesa el Gobierno por boca del ministro de Hacienda que los ingresos de esta por los conceptos del 20 por 100 de propios y 10 por 100 de forestales representan diez millones de pesetas escasas, añadiendo que relevar de tal pago implica poco menos que una desnivelación en los presupuestos del Estado, cuya cifra pasa en el año actual de tres mil quinientos millones.

Esos diez millones de pesetas afectan desde luego a los pueblos de pinares, todos ellos rurales y sin otros medios de vida que la producción del monte. Los demás Ayuntamientos apenas si tienen por ese concepto ingresos de importancia. Tres mil pueblos de pinares de vida miserable y llena de privaciones, sin otras fuentes de ingresos ni otra clase de riquezas, tiene que pagar diez millones de pesetas, el concepto de bienes propios y aprovechamientos forestales.

Pero además de ese 30 por 100 ha de pagar el 20 por 100 de remates, otra cantidad como persona jurídica y la contribución correspondiente con arreglo al líquido imponible, que en esta clase de bienes resulta bastante alto por razón de la riqueza que representan. Añada el lector paciente otros diez millones de pesetas por dichos conceptos y llegaremos a la conclusión, como ya hemos dicho otras veces, de que el producto de los montes es casi en su totalidad de la Hacienda.

Dice la R. O. que comentamos que el Estatuto municipal ha reformado los ingresos municipales, por las grandes facultades que concede a los Ayuntamientos para cobrar arbitrios nuevos y elevar la cuantía de los ya existentes. Por esta razón y teniendo en cuenta que las Diputaciones carecían de medios para realizar los múltiples fines que se le tienen encomendados, se acordó por el Gobierno de la dictadura que en la nueva ley provincial se atribuyera a dichos organismos la percepción íntegra de la recaudación de las cédulas personales, exceptuando aquellos Ayuntamientos que percibieran un tanto por ciento de recargo con arreglo a la recaudación de 1925.

Se da el caso que las Diputaciones han hecho caso omiso de estas disposiciones, y para no ir más allá de nuestra provincia diremos que la

Diputación de Burgos no paga a los municipios ese tanto por ciento a que tiene derecho. Únicamente la capital es la que lo percibe. El resto de los pueblos tendrá que apelar a procedimientos administrativos para conseguirlo. Salas de los Infantes ha de ser la primera que inicie la petición y el procedimiento en caso de que se le denegara.

Y vamos a terminar el comentario de la R. O. haciendo saber al Gobierno que los pueblos de las provincias de Burgos, Soria, Palencia y Valladolid se niegan a consignar en presupuesto cantidad alguna para el pago del 20 por 100. Las Delegaciones de Hacienda se niegan a la aprobación de los presupuestos. Se dará el caso de que al constituirse los Ayuntamientos en el mes de Mayo con arreglo al sufragio universal, se encontrarán las nuevas corporaciones con que no tienen legalizados sus presupuestos y la vida municipal no puede funcionar legalmente.

La mejor protesta del pueblo contra la negativa del Gobierno a suspender los apremios por el tan moso impuesto, es negarse a pagarlo, no consignar una peseta para esa obligación. Si hay responsabilidades para los gobernantes municipales, estos no la rehuyen. Si hay Cortes y estas representan la voluntad del país, a esas Cortes iremos a pedirle que no haga justicia y vote una ley por la que se exima a los Municipios del pago de los impuestos que atacamos.

Después de la supresión del Consorcio Resinero

Protesta de Municipios Sorianos contra una Real Orden

Presididos por el Alcalde de Soria D. Juan Brieva, reunieron ayer, a las doce de la mañana, en el salón de actos del Ayuntamiento, numerosos representantes de municipios de la provincia, propietarios de montes, a quienes afecta la disposición dictada recientemente por el Ministerio de Fomento y en virtud de la cual quedan suprimidas virtualmente las subastas, ya que se concede un privilegio a los fabricantes o rematantes, quitando toda libertad a los municipios propietarios de montes para la adjudicación.

La asamblea, como decimos, tenía por objeto protestar enérgicamente de la Real orden de Fomento, número 37, de fecha 2 del actual, sobre aclaración del Real decreto de disolución del Consorcio Resinero y que, en realidad, solo viene a modificar el sentido estricto del artículo cuarto del citado Real decreto. Disponía este que el industrial perteneciente al Sindicato de Fabricantes que, en virtud de las disposiciones que se

derogan por el mencionado Real decreto, hubiera resinado un monte de la Mancomunidad de propietarios o transformado sus mieras en la campaña de 1930, tendrá derecho de tanteo en las licitaciones que se celebren durante el presente año para el aprovechamiento del mismo monte, cuyo derecho podrá ejercitar dentro de los ocho días naturales siguientes a la adjudicación.

Por el contrario, en la Real orden de fecha 2 del actual se dispone:

Que el derecho de tanteo a que se refiere el artículo cuarto del Real decreto de 7 de Febrero último, ha de interpretarse en el sentido de ser exclusivamente aplicable para la próxima campaña y a favor de particulares y entidades que hubiesen resinado en régimen de consorcio, como consecuencia de los artículos 3, 11 y 12 del Real decreto de 13 de Septiembre de 1928, el arbolado de los montes o parcelas que por cesar aquél haya de adjudicarse en subasta de aprovechamiento de su resinación.

Que para hacer efectivo el expresado derecho, tan pronto como sea practicada la tasación que deba servir de tipo para la subasta y con anterioridad a ésta, se dará cuenta de aquélla y del pliego de condiciones al particular o entidad que hubiese practicado la resinación de la última campaña, concediéndole un plazo, no inferior a diez días, a fin de que puedan hacer uso de tal derecho, debiendo a su objeto constituir el depósito de garantía prefijado en los pliegos de condiciones y dar cuenta de la aceptación de todas las en ellos estipuladas a la Jefatura del distrito Forestal correspondiente.

Como puede verse, está en contraposición lo dispuesto en el Real decreto de referencia y en la Real orden de dos de los corrientes resultando perjudicados en sus intereses los pueblos propietarios de montes resineros.

Durante la asamblea hicieron uso de la palabra varios representantes, coincidiendo todos en que la precitada Real orden de dos del actual debe ser derogada inmediatamente, puesto que si se deja en libertad al fabricante, el mismo derecho debe otorgarse a los municipios propietarios de montes.

Los reunidos acordaron por unanimidad dirigirse a los Poderes Públicos para que sea atendida su justa demanda y al efecto quedaron aprobadas las siguientes

Conclusiones

Primera. Visitar al Excmo. señor Gobernador civil de esta provincia y al señor Ingeniero Jefe de Montes, para que transmitan a la Superioridad, si lo creen oportuno, la respetuosa y enérgica protesta

de las representaciones reunidas, motivada por la publicación de la R. O. del Ministerio de Fomento de fecha 2 de los corrientes:

Segunda. Que una comisión compuesta por las representaciones de Quintanas de Gormaz, Mancomunidad de Soria y su Tierra y Ayuntamientos de Soria y Almazán, se traslade inmediatamente a Madrid, para que de acuerdo con la Unión de Municipios Españoles se gestione en el Ministerio de Fomento la derogación de la Real orden referida, de 2 de los corrientes, o en otro caso la publicación inmediata de otra R. O., en la que se deje libertad a los pueblos, dueños de montes para hacer el ofrecimiento a los fabricantes, si lo consideran conveniente a sus intereses y si lo consideran perjudicial, que continúen los trámites de las subastas anunciadas, con arreglo a lo legislado con anterioridad a la R. O. repetida.

Terminada la asamblea, los reunidos visitaron al Sr. Gobernador civil de provincia y al señor Ingeniero Jefe de Montes, los cuales prometieron transmitir al Gobierno las legítimas aspiraciones de los municipios sorianos.

La Comisión nombrada en la asamblea, salió con dirección a Madrid en el correo de la tarde.

Mucho celebraremos que sus gestiones se vean coronadas por el éxito, ya que, suprimido el Consorcio Resinero después de incesantes trabajos, no es justo que una nueva disposición venga a causar perjuicios a los pueblos propietarios de montes.

De El Avisador Numantino.

NOTICIAS

Con el fin de pasar una larga temporada en la capital de nuestra provincia ha salido para Burgos el joven cortador Amado Camarero, hijo del acreditado sastre de esta ciudad don Santiago Camarero. Amado se perfeccionará en el corte y confección más esmerada en toda clase de prendas de sastrería para la próxima temporada.

Por un olvido involuntario dejamos de consignar el nombre del concejal y buen amigo nuestro don Federico Calvo en la reunión celebrada en el Ayuntamiento para tratar de las cuentas de la tómbola.

Ha pasado unas horas en Salas con sus padres el Capitán de Estado Mayor D. Antonio Sáez Izquierdo, regresando nuevamente a su destino.

Hace muchos meses que el precio del pan es oficialmente de 60 céntimos el kilo. Los panaderos de aquí solicitaron esta subida, pero posteriormente las gestiones del activo Alcalde D. Adalberto Bengoechea, ha conseguido que se rebaje cinco céntimos a la hogaza de dos kilos.

VISADO POR LA CENSURA

EL REY DE LOS GABANES

SANTIAGO CAMARERO

SALAS DE LOS INFANTES

ALMACEN DE PIELES Y LANAS ARSENIO MARTINEZ

SALAS DE LOS INFANTES

TINTORERIA SERRANA
MONTADA CON TODA CLASE DE APARATOS MODERNOS. LAVADO EN SECO
PLANCHADO RAPIDISIMO A VAPOR POR LA MAQUINA

HOFF-MAN

Lutos en 24 horas — Seriedad y economía

MANUEL GARCIA

SALAS DE LOS INFANTES

DISPONIBLE

CAFE-BAR
Especialidad en Café exprés y Licores de marca

José Marañón

PRACTICANTE

SALAS DE LOS INFANTES

ALFREDO PINEDA

ABOGADO EN EJERCICIO

SALAS DE LOS INFANTES

DISPONIBLE

FELIPE GARATE

ALMACEN DE PIELES — ULTRAMARINOS

Salas de los Infantes

CASA DE COMIDAS VINOS Y LICORES
DE

VALENTIN VICENTE

SALAS DE LOS INFANTES

DISPONIBLE

BOLETIN DE SUSCRIPCION

El Ayuntamiento de _____

Partido de _____

Provincia de _____ Se adhiere a la Campaña y abonará
SEIS PESETAS trimestrales para los gastos de propaganda y sostenimien-
to de «LA OPINION DE CASTILLA».

El Alcalde,

Señor Director de «LA OPINION DE CASTILLA» —Salas de los Infantes

DISPONIBLE

Imprenta, Librería, Objetos de Escritorio y Almacén de Papel y Sobres—Marcos, de Abajo.—Salas de los Infantes

SANTIAGO CAMARERO

SALAS DE LOS INFANTES